

LA SOCIEDAD, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Verónica Gauchi Risso

Docente, Departamento de Documentación, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina).
Magíster en Gestión Documental y Administración de Archivos, Universidad Internacional de Andalucía (España)
DEA y estudiante de Doctorado en Bibliotecología y Documentación Científica, Facultad de Comunicación y Documentación, Universidad de Granada (España).
Becaria de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).
vebega@mdp.edu.ar

RESUMEN:

Este trabajo describe las relaciones existentes entre la sociedad, el derecho de acceso a la información y el acceso a los documentos públicos, e indica las normativas por las cuales este derecho es regulado en la República Argentina. Si bien toda necesidad social no engendra un derecho, para una necesidad tan fundamental, objetiva y universal como el acceso a la información pública se hace necesaria la existencia de un derecho que la ampare para que cualquier ciudadano bien informado pueda cumplir con su papel, teniendo en cuenta que el derecho de acceso a la información pública condiciona una nueva forma de democracia, la democracia participativa. Como conclusión se manifiesta que el derecho de acceso a los documentos públicos es el derecho a conocer qué hacen las autoridades, en tanto es un derecho humano básico para la defensa de los derechos esenciales de los ciudadanos frente a los posibles abusos de la Administración.

PALABRAS CLAVE:

Acceso a la información - Derecho a la información – Documentos públicos - Políticas de información - Democracia

INTRODUCCIÓN:

El derecho de acceso a la información pública constituye uno de los pilares esenciales para el funcionamiento de la democracia. Este derecho que se encuentra enmarcado dentro de la tercera generación de los derechos fundamentales¹ del hombre que adquiere significación plena y efectiva en relación con un contexto temporal determinado y con una realidad socio-económica y cultural concreta. El derecho a la información nace ante la necesidad de reglamentar y organizar el ejercicio de un *derecho natural*², reconocido con estas características en las *leyes fundamentales*³ de los diversos países organizados en el ámbito jurídico-político al modo de los *estados de derecho*⁴.

La configuración inicial del concepto de acceso a la información se origina en la “*Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano*” en 1789 (Artículos 14º y 15º) en la cual se encontraba referido a la facultad de solicitar cuentas a todo agente público sobre su administración; 150 años después fue ampliado por la “*Declaración de las Naciones Unidas*” con el concepto de libertad de información.

A lo largo de los siglos este derecho ha ido apareciendo en las constituciones o leyes fundamentales de los Estados Democráticos, ligado al despertar del derecho constitucional acabó por encontrar una formulación terminológica clara en la Encíclica “*Pacem in Terris*” (1963) del Papa Juan XXIII

¹ Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. Cuando se habla de generaciones de derechos humanos o fundamentales se habla de derechos enmarcados en diferentes momentos históricos del mundo contemporáneo atravesados por diferentes modelos que asumió el Estado a lo largo del tiempo.

² La expresión *Derecho Natural* hace referencia a una corriente de pensamiento jurídico presente por más de 25 siglos; su idea fundamental es la tesis de la existencia de un Derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva, es decir, de origen humano, denominado precisamente Derecho Natural.

³ Se consideran leyes fundamentales las que tienen rango constitucional.

⁴ En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros, el estado de derecho es donde la ley es el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos.

denominado el Pontífice de los Derechos Humanos, en la que se reconoce su entidad como derecho fundamental. Aunque los estudios sobre la doctrina del acceso a la información, como hoy se la conoce, especialmente se remiten a la ley “*Freedom of Information Act*” de los Estados Unidos de 1966; sin embargo hay quienes se remontan a una “*Real Ordenanza Sueca*” de 1766 referida a la libertad de prensa en la cual se contemplaba el acceso a la documentación pública. La ley sobre libertad de información de los Estados Unidos de 1966 consagra un principio que es piedra liminar para todo el sistema de información pública: “*la información poseída por la Administración pertenece al pueblo*”, de este modo queda consagrado el principio republicano sobre la publicidad de los actos públicos. Desde los orígenes del sistema republicano, “*la publicidad de los actos de gobierno*” se consideró un principio esencial, en contraposición con el secreto y la oscuridad en el ejercicio del poder y en el manejo burocrático propio de los regímenes preconstitucionales.

Los profesionales del ámbito de la información bien sabemos acerca de los problemas que acarrea la falta de información y sobre las consecuencias de estar mal informado; la información es un factor de progreso en la sociedad contemporánea que aparece como una exigencia para el “bien común”⁵. Para poder actuar en la sociedad el hombre necesita de información, si bien toda necesidad no engendra un derecho, a una necesidad tan fundamental, objetiva y universal como el acceso a la información se hace necesaria la existencia de un derecho que la ampare, puesto que cualquier ciudadano no cumplirá con su papel más que si está bien informado.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

En el contexto argentino el derecho de acceso a la información se encuentra reconocido en el articulado constitucional (1º, 14º, 18º, 41º, 42º, 43º y 75º), en la “*Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica*”, y en legislación complementaria; en consecuencia se establece un conjunto de preceptos vinculado tanto con el sujeto que informa como con quien recibe esa información. Con relación al informador, y de acuerdo con las normas citadas, el derecho de acceso a la información se establece en las siguientes facultades:

- La publicidad de los actos de gobierno,
- Derecho a investigar y buscar informaciones y opiniones,
- Derecho a difundir informaciones de relevancia pública por cualquier medio y opiniones,
- Derecho a emitir informaciones y opiniones,
- Derecho a no ser censurado ni objeto de restricciones preventivas en forma explícita o implícita, directa o indirecta, a excepción de medidas destinadas a proteger la moral de los menores o adolescentes, o en casos de estados de excepción constitucional,

⁵ La doctrina de los derechos humanos pone el centro de atención en los bienes individuales que han de ser garantizados y promovidos y en la participación en los bienes sociales que le corresponde a cada persona en razón de su particular dignidad; desde la perspectiva del bien común, que atiende particularmente a la dimensión social y comunitaria del hombre, el respeto a los derechos humanos es una de sus condiciones básicas en cuanto asegura la buena marcha de la sociedad y facilita el que la comunidad política alcance sus propios fines.

- Derecho de acceso a las fuentes de información,
- Derecho al secreto profesional periodístico y a la reserva de las fuentes,
- Derecho a la cláusula de conciencia,
- Derecho al acceso y utilización de instrumentos y medios naturales o tecnológicos necesarios que permitan emitir las opiniones e informaciones.

En relación con el informado, las facultades son:

- Derecho a recibir informaciones y opiniones,
- Derecho a seleccionar la información que recibe y los medios a través de los cuales recibirla,
- Derecho a ser informado veraz y oportunamente,
- Derecho a que sea preservada su honra, datos personales y vida privada (habeas data),
- Derecho a obtener una rectificación o respuesta,
- Derecho a solicitar la imposición judicial de responsabilidades civiles y penales en los casos determinados por el ordenamiento jurídico.

Lo cual significa que este es un derecho de doble vía, que no se establece en un único sentido, sino que comprende tanto la libertad expresión y de emitir opiniones así como el derecho de buscar, investigar, recibir, publicar y difundir el conocimiento de hechos, datos o situaciones determinadas de relevancia pública, sin censura ni restricciones preventivas.

Este derecho puede ser considerado como la base sustantiva del derecho a la comunicación y uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es un pilar de todo Estado de Derecho porque no puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información que garantice la libertad de pensamiento esencial para el desarrollo del ser humano.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el ámbito de la administración pública el ejercicio del derecho a la información contribuye a que los ciudadanos puedan evaluar de mejor manera el desempeño de los gobernantes, fortalece la democracia y otorga una herramienta concreta para la transparencia del sistema; no puede existir una Administración eficaz sin control externo y no se puede controlar realmente sin información, en consecuencia, sin derecho de acceso a la información no podría ejercerse el control ciudadano sobre la gestión pública. El efectivo ejercicio de este derecho permite a los ciudadanos, entre otras cosas, monitorear y ser partícipe del control de la gestión pública; formar opinión sobre diversos temas, participar debatiendo con fundamentos y fomentar la transparencia en la gestión del Estado mejorando la calidad de sus instituciones.

En tanto derecho personal, el acceso a la información, se presenta como correlato de la libertad de expresión, y específicamente, de los derechos de libertad consagrados al resguardo del campo de la autonomía personal y el ejercicio de la libertad de expresión; la *Corte Interamericana de Derechos*

Humanos ha sostenido que la libertad de expresión es la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática siendo indispensable para la formación de la opinión pública.

Especialmente el derecho de acceso a la información se manifiesta en el *principio de difusión de todos los actos de la administración pública*, que se encuentra formalizado en: la publicación de los actos administrativos, la comunicación individualizada de los actos administrativos a quienes puedan estar interesados y la comunicación como respuesta a una demanda concreta de los administrados, incluida la posibilidad de obtener vista y copia de los documentos solicitados, obviamente estableciendo las garantías razonables de conservación del documento-fuente, sea o no original. El derecho de vista se encuentran consagrado en la constitución como una garantía procesal del ciudadano, la "vista" de las actuaciones administrativas se considera un importante elemento de la garantía de la defensa o del debido proceso (Artículo 18°); recordemos que el acceso a la información, la participación del ciudadano en el proceso decisorio y el acceso a la justicia constituyen los tres pilares de lo que hoy en día se denomina democracia participativa.

El efectivo ejercicio de este derecho permite a los ciudadanos, entre otras cosas, monitorear y ser partícipe del control de la gestión pública; formar opinión sobre diversos temas y poder participar debatiendo con fundamentos; así como fomentar la transparencia en la gestión del Estado mejorando la calidad de sus instituciones.

EL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Al derecho del ciudadano a ser informado corresponde el deber de la administración gubernamental de informar con veracidad, si bien este principio no es novedoso, sí lo son los progresos legislativos en algunos países para establecer normas claras y eficaces sobre la apertura de archivos y la atención de solicitudes de información que formulen los ciudadanos, con la excepción de aquellos documentos que se encuentren expresamente excluidos o reservados. El principio general es que la información de las reparticiones gubernamentales en última instancia no tiene otro dueño legítimo que el pueblo, según la fórmula acuñada por la legislación norteamericana, el acceso a determinados datos puede ser necesario para cualquier persona por múltiples razones de interés particular, pero además es importante para que se pueda controlar desde todos los ámbitos de la sociedad la regularidad y la eficacia de la gestión de los funcionarios.

Para que el derecho de acceso a la información pública pueda ser ejercido los poderes públicos deben concretar la aplicación de determinadas de medidas que garanticen el acceso a los archivos administrativos y registros públicos, tal como hoy se concibe a este derecho en relación con la documentación pública, porque son archivos administrativos y registros públicos los que tienen a su cargo la organización, conservación y difusión de todos los documentos generados o recibidos en las administraciones públicas como producto del ejercicio de las funciones y actividades que les han sido encomendadas y con el fin de alcanzar los objetivos y metas de la entidad; el cúmulo de esa producción documental es lo que da origen a los fondos de los archivos administrativos. “La

documentación administrativa como disciplina especializada tiene como objeto estudiar los procesos de creación y transmisión de información objetivada en el seno de la Administración Pública; así los profesionales de la información podríamos hablar de la Documentación aplicada a la Ciencia de la Administración, y de la Documentación para las Administraciones Públicas, o de ambos conceptos: Documentación Administrativa y Documentación para las Administraciones Públicas, refiriéndonos a aquella Documentación generada por los poderes públicos en el ejercicio de un acto administrativo, o conjunto de acciones regladas por las normas de procedimiento, reflejando el funcionamiento, actividad y gestión de la Institución Pública, así como las competencias y funciones del órgano que lo genera” (Fernández Bajón, 1996).

Durante las últimas décadas y en virtud de las decisiones políticas asumidas, los archivos han conseguido notables posiciones dentro de las estructuras institucionales, se han convertido en potenciales centros de información y resultan ser instrumentos imprescindibles al momento de gestionar de manera eficiente toda la documentación de la administración pública; como consecuencia los archivos han dejado de ser oscuros depósitos de papeles caducos e inutilizables para pasar a ser efectivos instrumentos de la gestión gubernamental y de la conciencia social.

La regulación actual del derecho de acceso abarca un sinnúmero de disposiciones normativas de distinto rango; así, encontramos disposiciones relativas al derecho de acceso en el ámbito de las instituciones públicas, el derecho de acceso a archivos administrativos y en general a los registros públicos, con una regulación específica en razón de la materia, referida a cuestiones estadísticas, medioambientales, tributarias, administrativas, etc.; pero para garantizar el derecho a la información se deben vencer primero las dificultades procesales que permitan el reconocimiento de las acciones públicas para posibilitar el acceso de todos los habitantes a la información pública.

DISPOSICIONES ESENCIALES EN TORNO AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN ARGENTINA

En la República Argentina, no contamos con una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que posibilite obtener información pública para toda persona que lo solicite sin discriminación alguna; sin embargo el libre acceso a la información pública es un derecho establecido en nuestra Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, formalizado de manera indirecta a través del artículo 75° inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional la *Declaración Universal de Derechos Humanos* y la *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre*. El artículo 19 de la *Declaración Universal de Derechos Humanos* establece que: “todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho incluye el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión”, consonantemente se pronuncia el artículo 13° de la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Y la Constitución Nacional de la República Argentina ampara el ejercicio de este derecho en sus artículos:

- El artículo 1º: que establece que la nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, por lo que el principio de *publicidad de los actos de gobierno* se presenta como una exigencia de la *forma republicana* de gobierno.
- El artículo 14º: establece la libertad de imprenta, y el derecho a dar, recibir información y peticionar información a las autoridades,
- El artículo 18º: que consagra el denominado derecho de vista como garantía procesal del ciudadano; siempre teniendo en cuenta que la "vista" de las actuaciones administrativas se considera un elemento importante de la garantía de la defensa o del debido proceso.
- El artículo 41º: que dispone el acceso a la información ambiental y la obligación del Estado a suministrarla; es importante señalar que la información no solo debe ser accesible a los efectos que la población pueda ser informada, tomar decisiones y dar opinión sobre los problemas ambientales que puedan afectarla directamente sino que además es trascendente que el estado provea información haciendo lo que corresponda para producirla en los casos en que no exista, a efectos de que la racionalidad de las decisiones pueda ser puesta efectivamente en marcha.
- El artículo 42º: que manifiesta que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho [...] a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
- El artículo 43º: que consagra el hábeas data, y protege el derecho a la intimidad, en relación con los datos de una persona, en oposición al hábeas corpus, que protege el derecho de libertad física de todos los habitantes.
- Y el artículo 75º, que en su inciso 19º: que incluye el dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor.

En el orden de la normativa nacional y con el objetivo de traslucir y mejorar la calidad de la gestión de gobierno, de favorecer la rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos, de fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil y de integrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, en el año 2003 fue sancionado por el del Poder Ejecutivo Nacional Decreto N° 1172 de “*Mejora de la Calidad de la Democracia y sus Instituciones*”⁶; esta norma que se aplica a todo organismo que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional incluye cinco reglamentos que regulan distintas herramientas de participación ciudadana: *Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional*; *Reglamento General para la Publicidad de las Audiencias de Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional*; *Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas*; *Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional*; y el *Reglamento General de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos*. Toda la información disponible con relación a la aplicación de lo establecido en el Decreto N° 1172/2003 se encuentra en el sitio

⁶ Normas disponibles en www.infoleg.gov.ar

www.mejordemocracia.gov.ar, donde se detallan cuáles son los pasos a seguir para realizar una solicitud de información, indicando cómo realizar la nota, dónde presentarla, y cuál es el plazo de contestación.

Por su parte, la Ley 25.831 ha establecido el *Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental*, esta norma ha marcado un importante logro en la materia, ya que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentre en poder del Estado, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. En su Artículo 3º se establece que para acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés determinado.

Sin pretender presentar un desarrollo exhaustivo con relación a los organismos estatales que poseen diferentes competencias en el ámbito de la administración pública y el acceso a la información pública la Argentina cuenta con la *Auditoría General de la Nación*⁷, que se encarga del control externo de la administración pública nacional y efectúa auditorías legales, financieras y de gestión para luego realizar recomendaciones; éste órgano fue incorporado con rango constitucional con la reforma del año 1994. Otra de las instituciones es la *Sindicatura General de la Nación*⁸ que se encarga del control interno de la administración pública nacional, efectuando auditorías financieras, de legalidad y gestión sobre la administración pública. También la *Fiscalía de Investigaciones Administrativas*⁹, que forma parte de la Procuración General de la Nación está encargada de promover investigaciones preliminares y sumarios administrativos como así también realizar denuncia penales e intervenir en causas judiciales todo ello en relación a la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada. Finalmente la *Oficina Anticorrupción*¹⁰ dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación tiene entre sus competencias el diseño de políticas públicas de transparencia para el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Además de estos organismos algunas leyes nacionales prevén la posibilidad de pedir información al Estado, entre otras: Ley N° 24240 de Defensa del Consumidor, Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental N° 25831.

Asimismo cabe destacar que el Estado puede denegar el derecho de acceso a la información, cuando así lo disponga una ley, en este sentido algunas leyes regulan cuándo el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido, por ejemplo sobre ciertos documentos: cuando contengan información sobre actuaciones del Estado en el ejercicio de competencias constitucionales no sujetas a su derecho administrativo, cuando contengan información sobre la Defensa o Seguridad Nacional, cuando se tramiten investigaciones de delitos que pudiesen poner en peligro la protección de derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando¹¹; los relativos

⁷ <http://www.agn.gov.ar>

⁸ <http://www.sigen.gov.ar>

⁹ <http://www.mpf.gov.ar>

¹⁰ Creada por Ley N° 25233: <http://www.anticorrupcion.jus.gov.ar>

¹¹ Ley Nacional N° 25.326 (Hábeas Data) que protege los datos de carácter personal.

a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial¹², los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria para evitar cualquier tipo de fraudes con relación a la fluctuación de la moneda.

Algunas provincias argentinas, en el marco del sistema federal de gobierno han sancionado leyes que son pioneras en el ámbito del acceso a la información pública, destacándose entre ellas: Río Negro, Chubut, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenta con una “*Ley de Acceso a la Información*”¹³, norma que prevé la obligatoriedad de suministrar la información solicitada a un órgano público o a los archivos, pero solamente obliga a instituciones públicas, de lo que resulta una importante diferencia con el *hábeas data* (de rango constitucional) que se puede invocar en determinadas circunstancias contra entidades privadas que manejen datos de carácter personal, ya que el *hábeas data* se aplica para reclamar información personal o que precisamente afecte la intimidad de las personas, que es la principal razón por la que solamente el afectado posee legitimidad para interponer esta acción.

CONCLUSIONES:

El derecho de acceso a la información pública, no es ni más ni menos que el derecho a conocer qué hacen las autoridades públicas; es tanto un derecho humano básico para la defensa de los propios derechos esenciales de las personas frente a los posibles abusos de la Administración, como un componente inseparable del derecho a dar y recibir información y de la libertad de expresión.

Tal como ha podido observarse el derecho de acceso a la información pública tiene amplia recepción normativa, si bien es cierto que no hay peor ley que la que no se cumple, también lo es que sin ley no existe siquiera la posibilidad formal de concretar muchos de los derechos que, por no estar expresamente escritos devienen tan sutiles e intangibles en nuestra vida cotidiana, que lindan con su inexistencia.

Mientras las normas legales, constitucionales e, incluso, supra-constitucionales, acreditan de manera intensa los principios de publicidad de los actos de gobierno, el acceso de los interesados a las actuaciones administrativas (salvo que ellas sean calificadas por acto expreso y motivado como reservadas o confidenciales), criterios de publicidad, razonabilidad, defensa del administrado, control de la actividad administrativa, eficiencia y eficacia de la actuación administrativa, lo cierto es que en la práctica tales disposiciones escasamente se cumplen y si se cumplen hay que sortear una cantidad de obstáculos que agotan a cualquiera.

Nuestra tradición administrativa, nuestra cultura, es devota del silencio, el secreto y la reserva y no de la publicidad de las normas que establecen las pautas de actuación de los administradores públicos (Pomed Sanchez, Luis, 1997), para ello se hacen necesarias campañas coordinadas por parte de todos los poderes del Estado con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía la posibilidad que tiene de exigir

¹² Ley de competencia desleal, de información que pueda favorecer el espionaje industrial.

¹³ Ley N° 104

al Estado el cumplimiento de la normativa existente; si bien desde el año 2003 ha existido una fuerte decisión política por parte del Poder Ejecutivo Nacional con relación al acceso a la información el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre la posibilidad de exigir el cumplimiento del mismo al Estado es escaso y el rol de la sociedad civil en éste campo resulta fundamental para lograr una mejor práctica de ésta herramienta vital para la democracia.

REFERENCIAS:

- BUSTAMANTE, José (2007). Situación comparada en América Latina y el Caribe. p. 102-115. EN: FERNÁNDEZ Aballí, Isidro (ed). Hacia la construcción de políticas nacionales de información: la experiencia de América Latina. Kingston: UNESCO. Disponible en: <http://infofac.ucol.mx/images/publicaciones/artes_libro.pdf> [Consulta: 11 de julio 2011].
- CASTRO Cid, B. de (1993). Los derechos económicos, sociales y culturales: análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos. León: La Universidad.
- DESANTES Guantil, J.M. (1992). "Documentación y participación administrativa". *Revista General de Información y Documentación*, vol. 2 (2): 121-138.
- ESCOLA, Jorge H. (1981). Tratado General de Procedimiento Administrativo. Buenos Aires; Depalma.
- FERNÁNDEZ Aballí, Isidro (ed) (2007). Hacia la construcción de políticas nacionales de información: la experiencia de América Latina. Kingston: UNESCO. Disponible en: <http://infofac.ucol.mx/images/publicaciones/artes_libro.pdf> [Consulta: 11 de julio 2011].
- FERNANDEZ Bajón, Ma. Teresa (1996). "Documentación administrativa: una revisión de las tipologías documentales administrativas comunes". *Revista General de Información y Documentación*, vol. 6, N2: 67-90.
- GUERRA, Maciel; Jordán, Valeria (2010). Políticas públicas de Sociedad de la Información en América Latina: ¿una misma visión?. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en: <<http://www.cepal.org/SocInfo>> [Consulta: 11 de julio 2011]
- JENSEN, Cristian (2006). Propuesta para la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento en la Argentina. p. 23-32. EN: Mastrini, Guillermo; Califano, Bernadette (comp.). La sociedad de la información en la Argentina. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert.
- JUAN XXIII (Papa) (1963). *Pacem in terris: la paz entre todos los pueblos, fundada sobre la verdad, la justicia, el amor y la caridad*. Madrid: Apostolado de la Prensa.
- MARIENHOFF, Miguel S. (2007). Tratado de derecho administrativo. 4ª ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- MASTRINI, Guillermo; Califano, Bernadette (comp.) (2006). La sociedad de la información en la Argentina. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert.
- MONTVILOFF, Víctor (1990). Políticas nacionales de información: manual para la formulación, aprobación, ejecución y funcionamiento de una política nacional de información. París: UNESCO. Disponible en: <<http://infofac.ucol.mx/documentos/politicas/28.pdf>> [Consulta: 23 de mayo de 2011].
- PAJARO Quesada, Rosalba; Betancourt Campos, Valeria (2007). ¿Qué es una política Nacional de información?. p.86-94. EN: FERNÁNDEZ Aballí, Isidro (ed). Hacia la construcción de políticas nacionales de información: la experiencia de América Latina. Kingston: UNESCO. Disponible en: <http://infofac.ucol.mx/images/publicaciones/artes_libro.pdf> [Consulta: 11 de julio 2011].
- POMED Sánchez, Luis (1997). "El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica administrativa". *Revista Administración Pública (RAP)*, N° 152: 439-440.
- SABELLI, Martha (2008). La información y el ciudadano en el entorno de la sociedad de la información: percepción de los actores políticos y sociales en el Uruguay. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.